

Renovación de los actores sociales en el campo: un ejemplo en el sector cafetalero en Veracruz*

Odile Hoffmann

A UNOS CIEN KILÓMETROS al norte de Jalapa, en el estado de Veracruz, la cuenca del río Bobo marca el principio de la gran llanura costera del golfo norte, que sigue avanzando hasta topar con Tamaulipas y la frontera con Estados Unidos. Del lado sur y el oeste, está limitada por la sierra de Misantla-Chiconquiaco, que aquí viene a desembocar en el mar, a la altura de la Villa Rica de la Veracruz que vio llegar las primeras naves españolas en 1519.

Estos dos medios, la costa y la sierra, tienen hoy desarrollos agrícolas distintos. El primero centrado en la caña de azúcar, la ganadería, desde hace unos 15 años en la citricultura; el segundo sigue dedicado primordialmente al cultivo del café, intercalando potreros y algunas parcelas de maíz. Pero no siempre fue así. Para comprender la sierra es necesario mirar al pasado, cuando sierra y costa eran parte de un mismo entorno regional. De ahí se podrá ahondar en la actualidad, para entender quiénes son los agentes del desarrollo local, los sujetos de los cambios ocurridos y, a fin de cuentas, los interlocutores que tanto busca el Estado en su afán de modernización del campo. Dado que la cafecultura ocupa el primer lugar en la escena, se analizará la organización del sector cafetalero y sus transformaciones, enfocándonos en el periodo que comienza a principios de los años ochenta y desemboca en la crisis devastadora de hoy en día.

* Por razones de espacio *ES* hizo pequeños cortes editoriales.

I. La región y el sector de actividad: dos entradas para un mismo cuestionamiento

Los pasos de la diferenciación regional

Durante siglos la parte baja de la cuenca, con selvas espesas cuya explotación se limitaba a la extracción de hule y maderas preciosas, quedó poco poblada después del casi exterminio de la población indígena.

Con el transcurso del tiempo grandes latifundios se extienden en la llanura, alrededor de la explotación forestal, algo de ganadería y un poco de tabaco en las vegas de los ríos. La explotación de la vainilla también fue muy importante hasta el siglo XX. Pero estas actividades no propician una real colonización de la región, pues básicamente estaban manejadas por unos cuantos comerciantes avencindados en las ciudades de la sierra vecina, más salubres económica y políticamente más dinámicas. Sólo admiten un poblamiento débil y disperso alrededor de los cascos de las haciendas.

De hecho es la sierra la que da vida a la región. Ahí reside una población importante, entre rancherías, pueblos y algunas ciudades, cabeceras de municipios, distritos o cantones según las épocas. La población, en su mayoría indígena, comprende además un grupo de rancheros medianos, españoles y sobre todo mestizos, que destinan la tierra a la ganadería, al cultivo de maíz y caña para la fabricación local de piloncillo y alcohol; también al tabaco y la vainilla si la ubicación y la calidad de sus tierras lo permiten. Este grupo de rancheros medianos ocupa los puestos administrativo-políticos y conforman la élite local que asume la relación del pueblo de la sierra con las ciudades y regiones del centro del país.

En las pocas ciudades de la región (Misantla, Tlapacoyan, Teziutlán), son los comerciantes, casi todos españoles o hijos de españoles, los que desempeñan este papel, además de que establecen vínculos económicos estrechos entre el altiplano, la sierra y sus propiedades de la costa por medio del comercio nacional (maíz, ganado, abarrotes) e internacional (exportación de vainilla, maderas preciosas, chicle y cueros, cuya gestión se centraliza en Teziutlán).

A fines del siglo XIX el cultivo del café refuerza la importancia de la sierra como zona privilegiada de expansión, por sus características ecológicas favorables y sobre todo por la presencia de una población campesina abundante. Son jornaleros o dueños de sus (reducidas) tierras y dispuestos a arriesgarse en la plantación de estos árboles recién traídos de Cuba. Misantla y Tlapacoyan se vuelven centros de acopio y comercialización del café, con la instalación de algunos beneficios húmedos cuyos propietarios, los rancheros locales, fungen como intermediarios

entre los productores y los comerciantes de las ciudades de Teziutlán y Jalapa.

Este modelo regional comienza a transformarse radicalmente con la paulatina colonización de la zona costera. En 1882 se funda Martínez de la Torre. Poco después se crea el municipio de Martínez que abarca todas las tierras bajas del antiguo municipio de Tlapacoyan, quitándole a éste el acceso al mar. Los grandes latifundios de la llanura se fraccionan por la presión de los comerciantes de Tlapacoyan y Teziutlán, que empiezan a entender la riqueza de estas tierras bajas. La deforestación se acelera ante la expansión ganadera y de la caña de azúcar, provocando a la par el decrecimiento de la explotación vainillera, cuya producción requiere de un medio selvático. El tabaco sigue siendo importante en las riberas de los numerosos ríos; a la vez, se intentan cultivos de arroz, de piña, y se generaliza la producción maicera.

En consecuencia, el poblamiento crece, con inmigrantes de otras partes del país y mano de obra de la sierra vecina y se acelera con la reforma agraria que fomenta nuevos núcleos de población y reparte grandes extensiones, llegando a 20% de tierras ejidales en el municipio de Martínez de la Torre en 1940 (y 40% en 1970). El mayor impulso regional se da en los años cuarenta, con la carretera que une Nautla a Teziutlán—adonde el ferrocarril llega desde 1890—y la instalación en Martínez del ingenio Independencia, en 1947. Ambos sucesos contaron con los auspicios del presidente Manuel Ávila Camacho, nativo de Teziutlán y dueño de varios miles de hectáreas en la llanura costera. Éste concibe a Martínez de la Torre como un polo regional de desarrollo y no dejará de influir en la política local. Desde estos años arranca un proceso de rápida diferenciación espacial; la sierra pierde su papel rector, en favor de los nuevos centros de población de la costa, principalmente Martínez de la Torre. La costa deja de depender de la sierra y tiene su propio camino con una población distinta, compuesta por peones y artesanos originarios de todas partes (a menudo del centro-norte del país, adonde los van a buscar los enganchadores) o que llegan simplemente atraídos por la disponibilidad de tierra y trabajo. A mediados del siglo XX la población de la costa ya era importante en la ciudad de Martínez de la Torre (25 000 habitantes en 1950) y en los nuevos centros ejidales, aunque es sólo en 1970 cuando la densidad de la población costera rebasa la de la zona montañosa. Mientras tanto, la sierra mantiene una importante población campesina; ahí el café se encuentra en las vertientes, a alturas que van de los 300 metros (Vega, Juchique, Yecuatla, parte de Misantla) a los 1 200 m (Atzalan, Tenochtitlán, Tlapacoyan (véase el mapa). Sin embargo, no recibe ningún efecto del desarrollo naciente de la región vecina. Misantla y Tlapacoyan pierden los dos primeros lugares que tenían

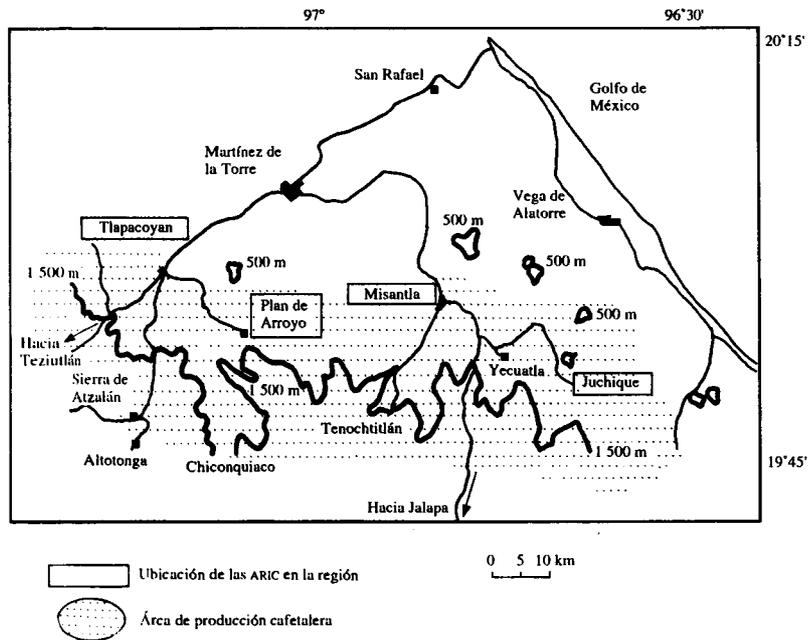
en población. Los comerciantes prefieren invertir en la costa, más dinámica, y sólo quedan los habitantes más arraigados a sus tierras, pequeños propietarios en su mayoría. A diferencia de Martínez, en 1980 el sector primario de la población económicamente activa es importante: 41% en Tlapacoyan y 53% en Misantla, contra 31% en Martínez. Reina el minifundismo y el reparto agrario tuvo pocas repercusiones en esta zona, que no había conocido un proceso de concentración de la tierra tan importante como en la llanura. Las sierras abruptas e incomunicadas no atrajeron a los agricultores, hacendados o rancheros que establecieron grandes propiedades durante el periodo colonial o en el siglo XIX. Al momento del reparto agrario, pocas fueron las solicitudes de dotación ejidal que recibieron respuesta positiva, por falta de terrenos afectables (26% de las tierras en Tlapacoyan, 36% en Misantla según el censo de 1970). Al igual que muchas zonas campesinas en el país, la franja cafetalera de Misantla-Tlapacoyan durante décadas no recibió ningún incentivo —sea en forma de créditos, infraestructura o asistencia técnica. Sólo los conoce cuando estalla la crisis agrícola de los años 1965-1970 y se inicia la intervención del Estado bajo la presidencia de Echeverría. La franja Misantla-Tlapacoyan se parece al conjunto de las zonas cafetaleras del país, caracterizadas por un elevado minifundismo, un medio físico difícil por el relieve de la sierra, la ausencia de vías de comunicación y la dispersión de las fincas y centros de población alejados de las carreteras. En otros términos, unas condiciones particularmente difíciles para organizar la producción e instrumentar programas de apoyo a la cafecultura.

El Estado y su política hacia el sector cafetalero

Antes de la intervención estatal los productores entregaban sus cosechas a algunos especuladores (“coyotes”) locales que trabajan para los exportadores de Jalapa, Puebla o Teziutlán. La reactivación del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) —creado en 1958 pero que de hecho empezó a trabajar en el campo desde 1973 como parte de las políticas de Echeverría en apoyo de los pequeños productores— modificó las relaciones entre los productores y los comerciantes del grano. Por primera vez el crédito¹ se generalizó entre los pequeños productores; la asistencia técnica hizo su aparición y, sobre todo, el Inmecafé se convirtió en una alternativa de comercialización frente a los tradicionales coyotes (llegó a controlar 43.5% de la producción nacional en 1982-1983). Para lograr una difusión extensa de sus actividades, el Instituto creó la Unidad Económica

¹ En forma de adelanto a la cosecha.

La franja cafetalera y las organizaciones ARIC en el centro de Veracruz



de Producción y Comercialización (UEPC), una figura estrictamente interna para el manejo del crédito, la asistencia y la comercialización. Con estos programas aumentaron las superficies sembradas con café (en algunas partes casi se duplicaron), los rendimientos por hectárea se incrementaron (*cf* Bernard, 1988; Hoffmann, Blanc-Pamard, Rossignol, 1987), y los cafecultores tuvieron reconocimiento económico y político. El Inmecafé desempeñaba el triple papel, por eso mismo ambiguo, de representante de los productores hacia el exterior, de asesor técnico-financiero de los mismos y de intermediario comprador de la producción. Llegó a ser tan importante y omnipresente que mantuvo a los pequeños cafecultores en un estado de dependencia casi total. Al ser una emanación del Estado, pretendía actuar y hablar en nombre de los pro-

ductores organizados en la UEPC, sin que realmente hubiera transparencia ni consulta en las grandes orientaciones técnico-comerciales que el Instituto adoptaba. Sus relaciones con los productores se volvieron más tensas a medida que las condiciones del mercado, por un lado, y la extrema burocratización, por el otro, disminuyeron y hasta anularon las ventajas ofrecidas a los pequeños cafeticultores, quienes además se sentían atados y engañados por las condiciones de comercialización impuestas por el Inmecafé.

Al tiempo que la "alternativa Inmecafé" de organización comenzó a mostrar sus límites, a principio de los años ochenta, el Estado busca flexibilizar las normas que rigen las organizaciones de productores y fomentar la asociación entre ejidatarios y pequeños propietarios. Así nacen las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC), durante la presidencia de José López Portillo. Son "asociaciones de segundo grado", constituidas por grupos de productores, ejidatarios o no (Sociedad de Producción Rural, ejido, Sociedad de Solidaridad Social). Su objetivo es estructurar la producción y la comercialización sobre una base regional, rebasando la ruptura tradicional entre los sectores social y privado. Algunas organizaciones de productores en lucha contra el Inmecafé en demanda de mejores precios, así como algunos cafeticultores acomodados, aprovecharon esta nueva figura legal para crear varias ARIC en el centro de Veracruz. En 1990-1991, casi todas estaban en bancarrota debido, entre otras cosas, a la desastrosa situación del mercado internacional del grano. En efecto, tras la ruptura de los acuerdos de la Organización Internacional del Café (OIC), en julio de 1989, los precios cayeron hasta 60%, sin que a la fecha (enero de 1992) se vislumbre un mejoramiento significativo del mercado para los productores.

Hoy la crisis de la cafecultura se ha generalizado y afecta incluso a los comerciantes y exportadores regionales que carecen de la capacidad financiera necesaria para manejar grandes volúmenes de café y obtener condiciones de pago ventajosas. Más allá del precio, lo que está en cuestión es la estructura misma del sector: la estructura productiva, financiera, sociopolítica, en fin, la necesaria reorganización de los actores principales, entre ellos los productores.

A partir de 1989, en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y como parte de las políticas de ajuste económico, el Estado participa activamente en esta reestructuración. Un primer paso fue la desincorporación del Inmecafé, siguiendo la línea general de repliegue del Estado de las esferas de la producción. Iniciado en 1989 y acelerado en los meses siguientes, el proceso desembocó en la drástica reducción de empleados y técnicos, así como en el retiro total del Instituto de las fases de acopio, asistencia técnica y crédito a los pequeños productores. La transforma-

ción del café cereza en pergamino, que anteriormente se realizaba en los beneficios del Inmecafé, pasó a los productores, luego de una desenfrenada carrera para “organizar” a los beneficiarios de la transferencia en los plazos fijados por el gobierno central, sin tomar en cuenta las realidades locales y los obstáculos a tal proceso.

El otro paso decisivo, que no se aplica sólo a la cafecultura, es la iniciativa presidencial para la reforma del artículo 27 constitucional. En ella se prevé —entre otros puntos todavía más relevantes, como el fin del reparto agrario y la posibilidad de privatizar las parcelas ejidales— la asociación libre entre productores, ejidatarios o no, y empresarios interesados en invertir en la rama agropecuaria. Todos estos cambios apuntan a la “normalización” del campo, a fin de adaptar las realidades actuales a las normas en vigor en los países desarrollados, con los cuales se pretende establecer lazos económicos igualitarios (GATT, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá). Dicha normalización también considera las relaciones políticas en el campo mexicano, en especial las estructuras corporativas que dirigieron, hasta ahogarlos, a los campesinos del sector social. El Estado pretende instrumentar nuevas relaciones con los productores y los actores de la comercialización. Por esto aspira a crear, por un lado, nuevas estructuras organizativas de productores y, por otro, nuevos mecanismos de negociación. En las primeras se pretende incorporar a varios tipos de productores, pequeños y grandes, para lograr la representatividad y el poder de decisión suficientes para que participen en la “gestión social de la economía rural” (Gordillo, 1988). Los segundos reunirían en un “comité mixto” el conjunto de los actores involucrados en la cadena productiva de un producto dado:

el comité mixto es un mecanismo de concertación y participación de los agentes involucrados en la cadena agroalimentaria del cultivo, así como de programación y coordinación de acciones en las fases de producción, comercialización, industrialización y consumo. El cual tiene como propósito reunir a oferentes y a demandantes para dar solución a los problemas y desarrollar integralmente el sistema-producto [...] en el contexto de las nuevas políticas de modernización (Comité Mixto de Participación Sistema-Producto, documento preliminar, enero de 1991).

Es útil detenerse y reflexionar sobre los antecedentes de esta modernización ya que no es ni la primera ni, seguramente, la última que conocen el campo y los pequeños productores. De manera particular, es válido estudiar las condiciones de emergencia y los problemas y contradicciones que conocieron las ARIC, que en su tiempo se consideraron como una etapa modernizadora esencial del campo. Si en verdad el Es-

tado busca “nuevos interlocutores” en el campo, es necesario entender antes por qué no se logra la comunicación con los existentes. En otras palabras, por qué están hoy invalidadas las organizaciones nacidas del anterior intento de modernizar las relaciones en el campo. ¿Dónde fracasaron?, ¿por qué?, ¿es posible rescatar esta experiencia antes de lanzarse a una nueva y riesgosa tentativa? ¿A partir de qué situaciones locales y regionales nacieron las ARIC?, ¿en qué entorno geográfico, económico y social se desarrollaron? Existen otras formas de organización entre los productores de café, pero con escaso peso regional. La Unión de Ejidos José Cardel, que abarca la sierra de Misantla-Tlapacoyan, fue creada por el gobierno en los años setenta para que sirviera de contrapeso a la Unión Campesina Independiente (UCI), la cual tenía reivindicaciones que empezaron con los impuestos y desembocaron en tomas de tierra. Esta Unión logró movilizar a varios miles de campesinos pobres de la sierra antes de caer bajo los golpes de la represión a fines de 1970. La Unión de Ejidos José Cardel es un eslabón más del aparato corporatista oficial, sin mayor presencia regional. También existe una cooperativa independiente, la *Quicempa-cayotl*, cuya actividad principal, aunque trabaja con cafecultores, gira en torno a una red de tiendas autogestivas a precios populares. Finalmente, dos cooperativas, Reicaf y Fuerza Verde, reúnen a un reducido número de pequeños propietarios, cafecultores acomodados asociados para la comercialización del producto. De estas organizaciones, las ARIC son las únicas que pueden pretender alguna representatividad en el plano regional, así como cierta independencia, muy relativa como veremos más adelante.

II. La región, los cafecultores: ¿cuáles actores?

En el centro de Veracruz se encuentra la principal zona cafecultora del estado, y ocupa un lugar estratégico en la producción nacional del grano. Se divide en varias “cuencas cafetaleras” que fungen como áreas de gestión y manejo del Inmecafé.

La cuenca de Coatepec —cerca de Jalapa, capital del estado y sede nacional del Instituto— adquirió preeminencia desde el final del siglo XIX con la instalación de comerciantes cafetaleros que impulsaron el beneficio y la comercialización del café Coatepec, que llegó a tener una cotización propia en el mercado internacional. Por medio de la UEPC, la mayoría de los pequeños productores de alrededor de Coatepec y Jalapa, quedaron integrados a las redes de comercialización, asesoría técnica y el crédito del Inmecafé. Mediante sus canales de negociación, éste suplió a los que, a nombre de los pequeños productores, tradicionalmente

había manejado la Confederación Nacional Campesina (CNC), que desde ese momento quedó marginada del campo cafetalero.

A medida que el Inmecafé confirmaba su retirada, este embrión de asociación, aunque interna y sin figura jurídica, dio lugar al nacimiento de otros tipos de organización. La ARIC Veracruz, por un lado (véase más abajo), la Red de Organizaciones Cafetaleras Autogestivas (ROCA), por otro, son ejemplos de los movimientos independientes que surgieron al toparse los pequeños productores con el fracaso de la intervención estatal.

La cuenca de Tlapacoyan conoce una situación muy distinta. Aquí no intervinieron directamente los grandes negociantes de los años 1940-1970, sino que dejaron a algunos grandes cafeticultores locales la tarea de acopiar el grano y llevarlo a Jalapa. Cada productor transformaba en su patio el café cereza en pergamino, pues por falta de caminos y transporte adecuado eran pocos los beneficios húmedos en la cuenca.

Al llegar a la zona, el Inmecafé instaló tres "áreas de trabajo" (Alto Lucero, Misantla y Tlapacoyan), cada una de las cuales contaba, en 1989, con alrededor de 5 000 productores y 10 000 hectáreas de cafetales (fuente: Inmecafé). La mayoría de los cafeticultores son minifundistas con menos de dos hectáreas de este cultivo.² Por medio de los centros receptores instalados en tiempos de corte (de octubre a febrero, en general), el Instituto se hizo presente en casi todas las comunidades, desplazando a los antiguos coyotes. Adquirió varios beneficios húmedos, entre ellos el de Atzinta, construido en 1952 por Beneficios Mexicanos y de gran capacidad (830 quintales diarios). Sin embargo, a pesar de esta presencia, el Inmecafé no logró consolidar una red eficaz de UEPC, las cuales, excepto por unas cuantas que se unieron al movimiento surgido en Coatepec con la ARIC Veracruz, nunca funcionaron como unidades de organización campesina.

Es importante recordar la relativa poca importancia de los ejidos en esta zona cafetalera, al contrario de la cuenca vecina de Coatepec. La ausencia de ejidos propició la dispersión y el aislamiento de las unidades productivas, a la vez que redujo el papel que hubiera podido desempeñar la CNC en las relaciones políticas locales.

Fue en este "terreno" infértil donde nacieron las cuatro ARIC más importantes del país en el sector cafetalero: Veracruz, Misantla, Tlapacoyan y Plan de Arroyo, que cubren toda la franja montañosa de la región de estudio. Esta coincidencia, de por sí, vale la pena estudiarse con más detenimiento.

² En el ámbito nacional se estima que 71% de los productores tienen menos de 2 ha, y 98% menos de 10 ha (Paré, 1991).

El surgimiento de las ARIC: cuatro estudios de caso

A principios de los ochenta, el sector cafetalero empieza un proceso de organización, característico tanto de la región como del país en general. Este proceso toma básicamente dos vías: el surgimiento de movimientos francamente campesinos e independientes, y la asociación "vertical" entre cafeticultores-exportadores y pequeños productores, en gran medida controlada por la CNC. Todos buscan independizarse del Inmecafé —al que se acusa de burocratismo, mal manejo y desgaste de fondos— para apropiarse del proceso productivo mediante el control de la transformación y luego de la comercialización del café. Pero los objetivos a mediano plazo difieren, al igual que las formas organizativas y los alcances políticos de cada uno.

La ARIC Veracruz y la lucha por los precios

Antecedente de la ARIC, la Unión de Productores de Café de Veracruz (UPCV) nace en 1982 con la movilización de los cafeticultores de la UEPC, que exigían al Inmecafé un aumento en el precio del producto. Esta movilización se extiende a todo el centro de Veracruz, constituyendo "a partir de 1982, el movimiento social más importante en el agro veracruzano" (Olvera, 1991:141). Incluye grupos de productores de los municipios de Yecuatla, Juchique y Misantla, además de los de la cuenca de Coatepec. Se plantea como una organización independiente y democrática, con la participación de asesores externos de la Unión de Uniones de Ejidos y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas, que inducen un manejo ideológico muy marcado en las luchas. A pesar de las divisiones internas y luego de la escisión (principalmente los "líderes naturales" del área cafetalera de Coatepec), la UPCV sigue movilizando a gran parte de los cafeticultores (10 000 manifestantes en Jalapa en junio de 1982, 8 000 en julio de 1983) en la reivindicación por los precios. Se trataba de un conflicto abierto y declarado con el Inmecafé y el Estado. Sin embargo, luego de éxitos temporales, la demanda de los precios llegó a un callejón sin salida. Los dirigentes propusieron entonces lo que llamaron "el cambio de terreno", o sea buscar el control de las fases de transformación y comercialización. Apropiarse de la cadena productiva hasta su última fase suponía adquirir o construir beneficios húmedos, lo que exigía acceso a créditos refaccionarios, que a su vez suponía constituirse en sujetos de créditos. Así se forma la ARIC Veracruz, en 1985, como un brazo operacional de la UPCV, que seguía activa en la lucha por los precios.

Luego de muchas dificultades, la ARIC Veracruz logra instalar un beneficio húmedo en Chiltoyac, municipio de Jalapa, y otro en Yecuatla,

con lo que se logra una capacidad total de procesamiento de 30 000 quintales por cosecha (285 quintales por día). Alrededor de 1987 las posiciones de la UPCV se modifican:

Se comenzó a discutir la necesidad de una alianza con el gobierno del estado y el Inmecafé que nos permitiera construir una fuerza propia. En el caso del Instituto se manejaba, además, que era preferible que no desapareciera porque entrarían las grandes compañías privadas (Celis, 1991:160).

Sin embargo se sigue reivindicando independiente:

Cabe señalar que, en cuanto al financiamiento, la Unión había adoptado la estrategia de no negociar con Banrural por considerar que esta institución podía intervenir políticamente en la organización o generar corrupción como había pasado con las ARIC de la CNC (Celis, 1991:162).

Aunque ya no busca el enfrentamiento directo con el Estado, la UPCV sigue siendo un actor político de oposición en el escenario estatal, como lo comprueba la participación de varios de sus miembros en las elecciones municipales de 1988, bajo la bandera de Cuauhtémoc Cárdenas. El rápido crecimiento de la organización —1 600 socios registrados en 1990— se acompañó de una concentración de poderes y decisiones que desembocó en el desplazamiento de los campesinos a favor de los líderes, con un funcionamiento de cúpula radicalmente distinto de los fundamentos democráticos que auspiciaron la creación de la UPCV. Por otro lado, la ARIC Veracruz no logra consolidarse económicamente. Después de unos años favorables debido al buen precio internacional y a la exportación gestionada por medio de la Unión en 1985-1986, sufre problemas financieros graves con la banca comercial (cartera vencida) y se encuentra debilitada al momento de enfrentar la crisis de 1988. Paralelamente, otras organizaciones de productores nacen en la región, con un modelo totalmente distinto: las ARIC de la CNC, que analizaremos en el siguiente apartado.

La apropiación del ciclo productivo por las organizaciones "oficiales": las ARIC-CNC

En Misantla, un cafeticultor y exportador importante —Marco Antonio Piña— aprovecha la coyuntura de crisis y desconfianza de los cafeticultores frente al Inmecafé para crear, a principios de 1980, la primera de las ARIC en la región. Junto con Armando Rodríguez, activista político proveniente del sector cañero donde había participado en los movimientos de los años setenta, organiza a los productores de la región de

Misantla en un proyecto económico y políticamente ambicioso: desplazar al Inmecafé, considerado el principal enemigo de los cafeticultores, grandes o chicos. Piña aporta el beneficio, maquinaria nueva, conocimientos y contactos en beneficiado y exportación, y los productores el grano. Aseguran así un volumen de acopio que otorga mayor capacidad de negociación frente al Instituto. La pionera de las ARIC pretendía una alternativa al Inmecafé y peleaba por su autonomía de gestión, principalmente en las cuotas de exportación. Estaba además apoyada por la CNC, que así recobraba la presencia perdida en el campo cafetalero, conforme la paraestatal se fue extendiendo.

En algunos años esta ARIC obtiene logros significativos, y controla la exportación y la distribución de su café en escala nacional por medio de la Distribuidora Conasupo (Diconsu). Fomenta la creación de la ARIC nacional, donde participaron 16 organizaciones locales de cuatro estados (Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz). Ésta promovió la organización de los productores, la apropiación de las etapas de transformación mediante la compra o construcción de beneficios, e influyó en los precios a favor de los productores (Hernández, 1991). Sin embargo, la corrupción, los fraudes y un manejo inadecuado de los recursos financieros acabaron con la ARIC nacional, de la cual salieron varias de las organizaciones autónomas que participaron en su fundación.

La ARIC Misantla también tiene problemas de liderazgo en 1985, y luego cae por fraudes de la dirección y por pérdida de apoyo campesino. Un segundo intento en 1987 (los productores hablan "del segundo ARIC"), con intervención de asesores externos y mayor participación campesina entre los dirigentes, fracasa por fraudes en 1989-1990. Los beneficios están parados y hasta desmantelados, mientras los socios, que ya sólo eran unos 100 en el último año, siguen con pérdidas importantes.

Pero antes de que fracasara, la ARIC Misantla había suscitado la creación de otra organización similar, con sede en la ciudad vecina de Tlapacoyan. Ésta nace en 1981, con la asociación de productores y el cafetalero-exportador Antonio Concha, sobre el mismo modelo que en Misantla. Los buenos precios del café de los años ochenta la favorecen ("era el tiempo de las vacas gordas") y conoce un desarrollo fulgurante. A los pocos años de su fundación compra tres beneficios húmedos (uno de ellos al mismo Antonio Concha) y uno seco (el único en la región), tres trailers y 21 camiones y camionetas; crea una empresa importadora en Estados Unidos (Gala Corporation) y su propia marca de café (Keldi). Desarrolla toda la infraestructura correspondiente, desde un vivero de café de alta capacidad (300 000 plantas) hasta un taller mecánico, una imprenta y un laboratorio fotográfico. Diversifica sus actividades hacia la pimienta gorda (de recolección silvestre en la región) que en 1988

exporta a Líbano, Holanda, Francia y Kuwait; con una empaedora y Gala Corporation incursiona en la comercialización de cítricos. En 1989 tenían 92 empleados de tiempo completo (obreros, administrativos y asesores) y la conformaban alrededor de 1 500 socios, miembros de 10 ejidos y ocho sociedades de producción rural. En 1989 la ARIC Tlapacoyan estaba constituida por el director y principal socio, Antonio Concha, y seis departamentos: producción, industrialización, exportación, apoyo al desarrollo rural, servicio al público y publicidad y relaciones públicas.

En unos ochos años, la ARIC se convirtió en un actor regional de primera importancia, tanto en el plano económico como en el político. A diferencia de la ARIC Misantla, la de Tlapacoyan fue conciliadora frente al Inmecafé. Al decir de sus actuales dirigentes no se trataba de desplazar al Instituto sino de negociar cuotas de exportación y condiciones de trabajo (asistencia, crédito), y probar al mismo tiempo la capacidad de autonomía y organización del sector cafetalero fuera de la paraestatal. Los campesinos participaron poco en el proceso, que estuvo siempre en manos de asesores y técnicos y, sobre todo, del director. Sin embargo, funcionó como empresa y logró regular el precio del café en la región en favor de los pequeños productores. Las relaciones políticas no estuvieron ausentes en la ARIC: su director fue presidente municipal de Tlapacoyan, dirigente activo de la Federación Nacional de Productores de Café (CNC) —única estructura oficial representativa de los pequeños productores— y es diputado local por el distrito de Tlapacoyan.

En estos mismos años ochenta se crea otra ARIC en Plan de Arroyo, municipio de Atzacan, con ocho grupos (cinco ejidos y tres sociedades de producción rural). No logra superar las contradicciones entre el Inmecafé, los productores y los maquiladores, y quiebra a los dos años. En 1985 se vuelve a impulsar con la gerencia general, y luego dirección, del doctor Gabriel Barrera. Éste, nativo del lugar, es un importante cafeticultor y ganadero miembro de una extensa y antigua familia de la localidad, propietaria de fincas, pastizales, bodegas y un beneficio de café (PAPSA). De manera similar a las otras dos ARIC, la de Plan de Arroyo se desarrolla a partir de un modelo de asociación en la que el director aporta la infraestructura agroindustrial, los conocimientos y la experiencia de exportación así como los contactos para la obtención y agilización de créditos. Con préstamos de avío industrial del Bancrugo en 1985, y refaccionarios del Banrural-FIRA, construyen un nuevo beneficio húmedo de 180 quintales (qq) de capacidad, una bodega, oficinas y se compran vehículos. La primera experiencia de exportación de la ARIC con un negociante de Jalapa (Piñero), en 1987-1988, se resume en pérdidas después de la quiebra y del fraude de éste en el mercado internacional. "El doctor", responsable de las ventas en la ARIC, negocia desde entonces

exportaciones directas con *brokers* estadounidenses o europeos. Los encargados de los departamentos (producción, beneficio, comercialización) rinden cuentas casi diarias al director, sin que los socios (298 productores) participen en el funcionamiento real de la asociación, aunque asisten a las asambleas de delegados cada dos meses. Esta ARIC acopia, maquila (o manda a maquilar en los beneficios vecinos de Plan de Arroyo, la ARIC Tlapacoyan y aun en Tlatlauquitepec, Puebla) y exporta café de toda la región, incluyendo el de lugares más lejanos como Coxquihui y Zozocolco en el Totonacapan. Su director es dirigente de la Unión Nacional de Productores de Café de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP) que agrupa a los productores de ingresos acomodados y de alta rentabilidad. La ARIC Plan de Arroyo, al igual que la de Tlapacoyan, no se enfrenta directamente al Inmecafé. Aunque reconoce la responsabilidad del Instituto, que no supo organizar el sector cafetalero, sus quejas se dirigen más bien a los maquiladores y a los mismos productores, a los que acusan de no lograr un café de calidad.

En 1989 la ARIC diversifica sus actividades, con el acopio y exportación de pimienta gorda, y en 1991 con la comercialización de maíz para los socios, pero sobre todo busca afirmar su posición de liderazgo en el sector cafetalero local, al promover la organización con otros 12 grupos de menor importancia (ejidos, comunidades, comités), con el fin de obtener créditos para construir un beneficio seco en la región y exportar directamente grandes volúmenes de grano. La ARIC Plan de Arroyo fue anfitriona e interlocutora (vocero autonombado de los productores) del presidente Salinas en su gira de 1991, y en las contiendas preelectorales ofrece abiertamente su respaldo y apoyo en favor de los dirigentes del PRI, a la vez que toma posición en las orientaciones de la CNC (carta abierta en apoyo a la candidatura de Hugo Araujo, febrero de 1992).

¿Son las ARIC actores sociales regionales?

Estas tres ARIC (Misantla, Tlapacoyan, Plan de Arroyo)³ representan un cierto patrón de organización de productores, afiliado a la CNC y con débil participación efectiva de los pequeños cafecultores. Siguen un modelo clientelista y muy jerárquico que propicia manejos discrecionales y hasta corruptos de los aparatos económicos de las organizaciones. Alentadas por el buen precio en el mercado internacional, crecen de manera espectacular en los años ochenta y se vuelven tentaculares, lo que

³ Así como otras, por ejemplo la de Martínez de la Torre, conformada sobre el mismo modelo con productores de cítricos.

explica en gran medida los problemas que enfrentan al terminar la década (Bartra [1991] habla de “los verdaderos monstruos”). Fueron creadas, en la mayoría de los casos, por iniciativa de grandes cafeticultores que buscaban construirse una doble base: económica, al contar con la aportación de numerosos productores para asegurar un acopio suficiente de café, negociar frente al Inmecafé y exportar directamente, rentabilizando así las instalaciones de beneficios húmedos que ya tenían; política, al constituirse una base de clientes potenciales que podían incidir en las orientaciones —electorales entre otras— decididas en el marco del PRI o de la CNC, tanto en el ámbito local (municipio) como del estatal y aun nacional (Federación y Unión Nacional de Productores de Café).

¿Cuál fue, y es, la incidencia real de la ARIC en la organización regional del sector cafetalero? ¿Cómo influyeron en la participación de los productores, en el manejo de su propia producción y, más allá, en sus condiciones de vida? Una primera respuesta sería bastante negativa. Como se mencionó, el funcionamiento de las organizaciones fue exclusivamente cupular. Los productores participaban en la medida en que “confiaban” su café a las distintas ARIC, el respaldo para que se desarrollaran. La mayoría daba este único paso elemental, sin otro compromiso o implicación personal o colectiva. Los dirigentes argumentan que la prioridad era organizar el mercado local para librarse de los coyotes y manejar el producto de manera independiente, lo que implica un cierto grado de concentración de las decisiones para intervenir rápidamente en las transacciones de exportación.

En Plan de Arroyo, los mismos dirigentes subrayan que la población campesina es analfabeta, en su mayoría, o sin preparación adecuada para participar activamente. Ellos se ven como sus representantes frente al exterior, e insisten en el papel de mediación y en la dimensión política que asumen: “es por esta interrelación entre representantes, base de productores y dependencias, por la que la Asociación ocupa un espacio fundamental en el desarrollo económico y social de la región” (ARIC Plan de Arroyo, informe 1991). El área de influencia de la ARIC Plan de Arroyo es la sierra de Atzalan, lugar particularmente aislado pues no existen carreteras o brechas transitables fuera de la que une la cabecera con Tlapacoyan. Más que alternativa de organización para el campesino, la ARIC es otro punto de acopio, y a la vez un interlocutor capaz de traducir y transmitir sus aspiraciones y preocupaciones hacia las esferas de decisiones. En Tlapacoyan la situación es distinta. Las comunicaciones están más desarrolladas, en tiempo de cosecha los compradores son numerosos y el campesino está más acostumbrado a negociar o elegir su lugar y condiciones de venta. La ARIC ganó legitimidad regional en tanto reguló los precios y condiciones de compra del café cereza durante casi

diez años. Además, la ARIC tiene un departamento de “desarrollo rural”, que pretende actuar sobre las condiciones de vida de los socios mediante programas de salud, de caminos, de capacitación, etc., dándose los medios financieros y operativos correspondientes. La ARIC Tlapacoyan es un actor local que no puede ser ignorado, pero no ejerce monopolio sobre el mercado. En este sentido es una real “alternativa”, es decir, una de las posibilidades que puede escoger el pequeño productor. Quizá ése sea el mayor logro de la ARIC: demostrar que es posible fracturar el poder de los antiguos comerciantes del café e instrumentar, por medio de la organización, nuevas formas de acopio-comercialización. Sin embargo, la crisis destruyó el modelo, pues la ARIC no puede ofrecer precios razonables para el productor.

En el plano regional, las ARIC cubrieron casi toda la zona de sierra productora de café. De manera significativa las “oficialistas”, Misantla, Plan de Arroyo y Tlapacoyan, se ubican donde no existe ningún otro tipo de organización. La CNC está ausente por falta de ejidos, las dependencias rara vez penetran en estas sierras de difícil acceso, y no existe movimiento independiente como en las regiones menos apartadas o más estructuradas (cerca de Jalapa, por ejemplo, con la ROCA). Es ahí donde las “alternativas” propuestas por algunos personajes de importancia local, apoyados por el aparato corporativo tradicional, tuvieron mayor eco.

En otros términos, aunque las ARIC oficialistas no responden a los criterios de verdaderas organizaciones de productores, no dejan de ser sus portavoces, protagonistas esenciales (¡en tanto únicos!) de los procesos de transformación en el campo. En el decenio de los ochenta estructuraron la región en torno a sus actividades y lograron rescatar del olvido al sector cafetalero.

1988-1989: rupturas en el sector cafetalero

Los años 1988 y 1989 son un parteaguas decisivo en el campo cafetalero, donde se conjugan elementos del sector con otros más generales. Desde 1988 los Pactos para la Estabilidad y el Crecimiento Económico influyeron negativamente en los recursos financieros de las organizaciones: todas tenían créditos pendientes importantes, con tasas elevadas que se compensaban por la devaluación constante del peso y la exportación del producto en dólares. Al estabilizarse (relativamente) el peso frente al dólar, los cargos financieros se hicieron insostenibles para muchas de ellas, que cayeron en cartera vencida ese mismo año. Al mismo tiempo empezaba el proceso de reestructuración de la banca oficial (Banrural), que de inmediato se volvió mucho más reticente a otorgar créditos. Empezó una carrera obsesiva en busca de alternativas de financiamiento

con la banca comercial o mediante convenios con compañías privadas que regresaban a la escena regional. Empero, el golpe más fuerte vino en 1989. Este año fue la conjunción de la ruptura de los acuerdos de la Organización Internacional del Café, en julio y la baja consecuente de los precios en el mercado internacional (de cerca de 60%), con unas condiciones meteorológicas desastrosas en la región: sequía en las partes bajas en la primera mitad del año, heladas muy severas en diciembre en las partes más altas. La sierra de Misantla fue la más afectada: la producción se redujo a más de la mitad, y localmente la cosecha 1989-1990 se perdió en su totalidad.⁴ Sin recursos financieros, sin grano para acopiar, todas las organizaciones de productores quebraron.

La ARIC Misantla, como vimos, había dejado de trabajar desde el año anterior, por fraude, y adeudaba al Banrural 918 millones de pesos. En diciembre de 1989 la ARIC Tlapacoyan debía alrededor de 6 000 millones de pesos al Banrural, y todavía 4 817 millones en litigio en mayo de 1991. La ARIC Plan de Arroyo acababa de reestructurar con esa institución su deuda de 2 000 millones a siete años. En 1991 aún restaba pagar 166 millones, de los cuales 75 millones se encontraban en litigio.⁵

La ARIC Veracruz debe 1 500 millones a la banca comercial (Banamex). Se vuelve al Estado, que busca, al mismo tiempo, instrumentar y acelerar sus políticas tanto de desincorporación del Inmecafé como de reforma bancaria, a la vez que desarrollar el Pronasol. El campo cafetalero se vuelve el laboratorio donde se aplica la “nueva política” del Estado hacia el sector social, con todas las contradicciones e insuficiencias que implica ser pionero.

III. Las “propuestas” del Estado

La desincorporación del Inmecafé

Monstruo tentacular, el Inmecafé había probado su ineficiencia hacía varios años y recibía críticas unánimes del conjunto de los productores, organizados o no. Según el discurso oficial, se decidió “transferir” las infraestructuras industriales del Inmecafé a los productores, para “de-

⁴ En la región vecina de Coatepec, los pequeños cafeticultores no tuvieron ingresos provenientes del café en todo el año, y se vieron obligados a reorientar drásticamente las actividades familiares y a reducir de modo impresionante el gasto doméstico, empezando por el alimenticio (cf. Pasquis y Sallée, 1991).

⁵ Cifras del Banrural, sucursal de Martínez, mayo de 1991. En los periódicos locales se manejan otras cifras, en general muy superiores, sin que se puedan comprobar.

volver las instalaciones a sus verdaderos dueños [los productores], y dejar el paternalismo” dado por la intervención del Instituto en el proceso productivo. Se trata de una medida de gran envergadura pues son 36 beneficios húmedos y diez secos que el Estado transfiere al sector social. La mayoría se encuentran en Veracruz, con alrededor de 40% de la capacidad instalada de transformación del café cereza en pergamino (véanse los anexos).

En general, las organizaciones de productores no recibieron, ni pidieron, beneficios húmedos, sino maquinaria suelta, como despulpadoras y secadoras, para completar sus propias instalaciones.

De hecho, los principales “beneficiarios” fueron las ex UEPC no organizadas. El Instituto impulsó, e incluso impuso, la “organización” de los productores retomando frecuentemente las estructuras de las UEPC. También fomentó, y a veces procedió él mismo a la transformación legal de las UEPC en Sociedad de Solidaridad Social (SSS), paso formal indispensable para recibir los beneficios. Esto supuestamente debía abrir el acceso al crédito bancario, al ser las SSS figuras jurídicas de pleno derecho. Sin embargo, los bancos se mostraron renuentes a financiarlas y sólo lo hizo el Banrural, obligado y contra su voluntad, para el primer año de transferencia (1990-1991). Ya anunció que no renovarían los créditos a las SSS, sino solamente a los productores con contratos individuales.

En la cuenca de Tlapacoyan-Misantla se transfirieron cuatro beneficios, cuya capacidad instalada conjunta corresponde a casi la mitad de la capacidad regional de transformación del café cereza en pergamino. En el cuadro 1 se resumen sus características técnicas.

Sin embargo, hay numerosos obstáculos a la verdadera transferencia del poder de acopio, maquila y comercialización. En primer lugar, muchas instalaciones son obsoletas, se encuentran en mal estado y su capacidad real de trabajo es muy inferior a la instalada. En segundo término, los productores carecen de la capacitación técnica para manejar satisfactoriamente los beneficios. Los programas del Instituto en apoyo de los beneficiarios de la transferencia fueron insuficientes tanto en personal capacitado como en tiempo: sólo están previstos para la primera campaña (1990-1991), a menos que los productores aseguren el pago de los técnicos. Junto con el manejo técnico, la administración de un beneficio exige conocimientos que los productores no tienen ni pueden pagar, empezando por la gestión financiera. La búsqueda de créditos se vuelve la principal actividad, en perjuicio de otras labores indispensables. Por fin, en la región de Misantla las heladas de 1989 provocaron una fuerte baja en la producción; el acopio fue mínimo y la mayoría de los beneficios transferidos trabajaron a menos de 30% de su capacidad en la campaña 1990-1991.

Cuadro 1

Operación de los beneficios húmedos transferidos del Inmecafé
en la región de Misantla
(Cosecha 1990-1991)

	<i>San Antonio</i>	<i>La Garza</i>	<i>Vicente Guerrero</i>	<i>Juchique</i>
Capacidad (qq/día)	580	210	140	496
Rendimiento (kg/qq)*	268	250		254
Capacidad de bodega (qq)	4 000		750	5 000
Café maquilado (qq)	716	100	1 260	1 060
Vendido en marzo (qq)	652	100	640	1 060
Precio de venta/qq (pesos)	206 000	260 000	205 000	224 000
En bodega en marzo (qq)	68		620	
Anticipo a productores ¹	500	700	500	500/700
Costo de operación/qq ²	18 615	16 000	34 712	15 700
Número de proveedores ³	141		280	
Número de grupos de socios (De los cuales son sss)	28/33	22	12	
Grupos con crédito	11	4	---	10
Crédito del Banrural por superficie (ha)	548	617	395	1 302
Beneficiarios	588	321	358	335
Crédito autorizado (millones de pesos) ⁴	344	102	226	595

* Kilos/qq = cantidad de kilos de café cereza por quintal de café pergamino = medida de la eficiencia del beneficio húmedo - A mayor cantidad de café necesario para obtener 1 quintal de pergamino, menor eficiencia del beneficiado.

qq: 1 quintal=250 kg de café cereza en promedio, 45.4 kg de café oro y 57.5 kg de café pergamino.

¹ Precio por kilo de cereza pagado al productor, en pesos.

² Costo de operación del beneficio húmedo, en pesos por quintal beneficiado. Incluye renta al Inmecafé (1 597 pesos por qq), sueldos, papelería, combustible, luz, manejo y flete, material eléctrico, gastos financieros e intereses.

³ Número de proveedores, libres y socios.

⁴ Crédito autorizado por el Banrural para la cosecha 1990/1991, en el programa de apoyo al café de exportación Bancomext-Banrural. En la mayoría de los casos el crédito ejercido fue interior, por falta de producción después de las heladas. En mayo de 1991 se había reembolsado 95 por ciento.

Fuentes: Banrural, sucursal de Martínez de la Torre. Reunión de evaluación para los beneficios en transferencia, Misantla, 19 de marzo de 1991.

Los problemas internos de los grupos beneficiados con la transferencia parecen infranqueables: la organización fue impuesta y demasiado rápida. En 1989 la Comisión Intersectorial Gasto-Financiamiento pro-

puso la desincorporación del Inmecafé “en forma acelerada”, en tres ciclos, “al ritmo del fortalecimiento de las organizaciones campesinas, para que esto sea un beneficio y no una carga” (*Gráfico de Xalapa*, septiembre de 1989). En abril de 1990, luego de la visita del presidente de la República a Miantla y su discurso a los cafeticultores, el plazo se redujo a apenas 60 días... Los conflictos internos no tardaron en surgir, en especial en Atzintla que reúne a más de 40 grupos de la región, sin afinidad o relación anterior.

Así, la transferencia aparece más como una salida honorable para el Estado, al deshacerse de una institución incosteable, que como una ganancia real para los pequeños productores. Además, como resultado de la política del Inmecafé de dotarse de instalaciones propias en los años setenta y ochenta, aunque existían beneficios privados, la maquila dejó de ser una etapa estratégica en el control del proceso de transformación del producto cereza en pergamino pues la capacidad regional de beneficios es muy superior a la producción (véanse los anexos).

El sistema de financiamiento: recurso estratégico para las organizaciones, herramienta de doble filo para el gobierno

En un primer momento, y como respuesta a las demandas de los productores organizados, el Estado desbloqueó fondos por 19 000 millones de pesos del Fideicomiso para el Café (Fidecafé) —constituido con cuotas de los productores—, principalmente para asegurar el acopio en la campaña 1989-1990. A propósito, pues los productores estimaban que los fondos les “perteneían”, de hecho o forzados por problemas financieros, la mayoría de los beneficiarios no reembolsó los créditos. Esto descapitalizó al Fidecafé, que no volvió a fungir como acreedor en los años siguientes, y provocó un mayor endeudamiento de las organizaciones.

En 1990-1991 las organizaciones entablan negociaciones con las instituciones bancarias para obtener nuevos créditos y reanudar la actividad de acopio, transformación y exportación. Con una demanda común de reestructuración de adeudos, en enero de 1991 se forma la Coalición de Organizaciones Cafetaleras. Ésta reúne hasta 63 organizaciones e intenta comprometer al Estado por medio de las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y de la Reforma Agraria (SRA), así como de la LCA. Pero no logra avanzar en sus negociaciones pues frente a la situación desesperada de la mayoría de los grupos, cada uno busca una salida propia, sin comprometer sus últimas posibilidades por maniobras políticas inadecuadas (García y Sallée, 1991). Y todos se enfrentan a la reorganización en curso de la banca oficial.

El Banrural y la "modernización" bancaria

La región depende de la sucursal del Banrural en Martínez de la Torre, cuya cartera vencida es una de las mayores del estado. En su informe de enero de 1991 menciona: "el monto total de nuestra cartera está integrado principalmente por los créditos vencidos de las ARIC Tlapacoyan y Plan de Arroyo, y otros menores de las ARIC Martínez y Misantla", o sea 8 122 de los 10 664 millones de pesos del total de la cartera vencida.

El monto de la cartera vencida de la sucursal pasó de 100 millones de pesos en diciembre de 1989 a 10 000 millones en diciembre de 1990; 95% de la generación de las deudas provienen de créditos de avío-industrial de las ARIC. En realidad, este aumento no refleja un crecimiento del endeudamiento de las organizaciones, sino un cambio en el funcionamiento interno del Banrural: en 1990 se negaron los tradicionales "créditos puente" que los deudores obtenían de manera casi automática, y salieron a la luz las deudas que antes se escondían en el plan contable.

El "Nuevo Plan de Operación" del Banrural, puesto en marcha desde 1989, incluye diversas medidas para romper el ciclo de endeudamiento/corrupción característico de esta institución (véase Pepin-Lehalleur, 1990):

—ya no se presta a clientes con cartera vencida; ya no se aceptan pagarés múltiples o colaterales (de grupos "solidarios" como en los ejidos por ejemplo); la garantía es de propiedad (terreno, casa, equipo); no se presta para jornales ni para compra o arrendamiento de tierras;

—el banco ya no proporciona servicios de aseguradora, ni de asesoría. Los inspectores de campo y la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera (ANAGSA), pilares de la corrupción, desaparecen en 1990 y pasan al sector privado;

—el banco se retira de las zonas conocidas como sistemáticamente siniestradas, dejando el lugar al Pronasol.

Además, se lleva a cabo una reestructuración interna (por la cual se cierran 22 de las 50 sucursales en la entidad), una reorganización territorial y el despido de empleados. Se pretende así "aclarar las cuentas", hacer más transparentes las reglas de funcionamiento del banco, y modificar las relaciones con los acreditados, con el lema: "hay que dejar el paternalismo y responsabilizar al productor". Los tratos deben ser personalizados e individualizados, excluyéndose los trámites colectivos o la intervención de grupos u organizaciones.

Las ARIC resultan particularmente afectadas por estas medidas. El anuncio del presidente de la República en torno a una nueva negociación de las deudas, a principios de 1992, puede marcar una pauta en el hundimiento financiero de las ARIC, aunque a la fecha (enero de 1992) no se conocen los procedimientos y las normas de la renegociación.

Sin embargo, el Banrural no deja de ser la institución oficial de apoyo a las actividades agropecuarias de los productores de bajos ingresos (PBI), los que obtienen menos de mil veces el salario mínimo o 10 millones de pesos de utilidad. De hecho desempeña un papel político de primer plano, al permitir u orientar la aplicación de las políticas decididas en el centro.

Los cambios en la política agrícola del gobierno central necesitan herramientas técnicas, entre ellas las financieras. Aunque algunos analistas e incluso funcionarios del propio banco pronostican su próxima desaparición, todos coinciden en señalar que no será antes de haber cumplido con una meta prioritaria del gobierno: inducir modelos de financiamiento comercial entre los pequeños productores (ejidatarios en su mayoría), acostumbrados durante décadas a la corrupción y al manejo político de los recursos bancarios, tanto en el plano local como en el regional y estatal. Es el paso indispensable para la futura "transformación" del ejido que se plantea en la reforma al artículo 27 constitucional.

Esta orientación sin embargo, se enfrenta a intereses muy fuertes, tanto del mismo Estado como de sus funcionarios y de otros actores locales, y la disociación entre el tratamiento político y el financiero todavía no se consume. De hecho, el otorgamiento selectivo de créditos reviste un significado político que no puede desestimar a los grupos u organizaciones de la región. Amenaza disfrazada o simple advertencia, la manipulación continúa, y el Estado difícilmente puede automutilarse y perder un medio de presión tan poderoso como es el control del sistema financiero. En todo caso tendría que fomentar mecanismos de replazo, lo que de alguna forma viene a ser el Pronasol.

El Pronasol y los productores cafetaleros

Sin hacer un análisis global del Pronasol (véase Moguel, 1991), ni uno muy detallado del plano local (trabajo previsto para un futuro próximo), resulta interesante subrayar cuán importante es y qué formas adquiere la intervención del Pronasol en el ámbito de las organizaciones de, en este caso, cafeticultores.

Como hemos visto, éstas, oficialistas o no, son incapaces de trabajar sin financiamiento externo y se encuentran virtualmente en quiebra frente a la negativa de nuevos créditos. Otra vez el Estado funge como interlocutor privilegiado, pues es el único capaz de desbloquear la situación. Después de la mediación fracasada y pasajera del Fidecafé, sólo queda el Pronasol que, de hecho, en enero de 1990 empieza a financiar las organizaciones de cafeticultores, entre ellas a las ARIC. El Pronasol

llena así el hueco dejado por el sistema supuestamente “modernizado” de la banca. Resulta bastante paradójica la combinación de ambos sistemas —el bancario y el Pronasol— en el funcionamiento de un mismo ente social —las organizaciones— que nadie desea ver desaparecer brutalmente. ¿Se puede hablar de modernización si ésta implica la intervención asistencialista del Estado exactamente en el lugar de sus repliegues, si conlleva una marginación del sector social, obligado a entrar en el “circuito de la pobreza”? Los créditos del Pronasol a las empresas sociales se deciden a nivel estatal y son fruto de apretadas negociaciones a veces influidas —pero no siempre brutal ni abiertamente— por las posiciones políticas de cada grupo u organización en el escenario regional, tal como sucede (¿sucedió?) en el Banrural. Se puede hablar, así, de desplazamiento de funciones; la negociación financiera da al Estado una presencia y un poder de presión indiscutibles, aunque éste pretenda negarlo con un discurso sobre la “responsabilización” y la “autonomía” de las organizaciones de productores.

De ahí las contradicciones del Pronasol: lleva en muchos casos a un “reforzamiento de las organizaciones oficiales” (*Diario de Xalapa*, 21-7-1991), y a la vez necesita todas las organizaciones presentes en el campo para canalizar sus esfuerzos y poner en práctica sus diferentes y numerosos proyectos (crédito a la producción, pero también los programas Escuela Digna, Mujeres en Solidaridad, Unidad Médica Rural; el programa emergente para el café y el maíz y otros más específicos y locales, para sólo mencionar los que existen en la región). En la sierra de Atzalan, el Fondo Regional de Solidaridad está conformado principalmente por las ARIC Tlapacoyan y Plan de Arroyo, pues son, como lo mencionamos, los únicos interlocutores de envergadura en la región.

Conclusión

En estos tiempos de cambio profundo del agro mexicano, el sector cafetalero es una especie de laboratorio donde se concentran aspectos clave de las nuevas políticas agrícolas: la apertura a las reglas del mercado después de la ruptura de los acuerdos de la OIC en 1989, el retiro masivo del Estado con el “adelgazamiento” del Inmecafé, y el reacomodo político obligado del sector social, aun antes de la reforma del artículo 27 que amenaza su existencia misma. Además, condiciones objetivamente desfavorables en el sector cafetalero aceleraron la quiebra de las empresas sociales nacidas de los movimientos campesinos de los años setenta y principios de los ochenta.

En tal contexto vale destacar los rasgos políticos de estas agrupacio-

nes, aquellos que les dieron fuerza antes de hundirlas casi una década después.

Al nacer, parecen concretar los proyectos del presidente José López Portillo (1976-1982) con la Ley de Fomento Agropecuario, que preconizaba las asociaciones mixtas de pequeños y grandes productores o empresarios agrícolas. Frente al descontento campesino que no había cesado con las políticas de reparto agrario y mayor intervención estatal del presidente Echeverría, dicha Ley propone organizar y combinar los sectores privados y ejidales, sin tocar uno de los fundamentos de la estructura sociopolítica en el campo: la tenencia de la tierra. Se pensaba que tal reforma de las estructuras económicas bastaría para dinamizar el campo, sin necesidad de revisar el funcionamiento político imperante. Empero, se produjo justamente lo contrario desde que el aparato corporativo aprovechó la oportunidad para ampliar o consolidar su presencia por medio de estas nuevas estructuras. En efecto, a raíz de la posibilidad de asociación con productores privados que conducían las ARIC, se abrió un nuevo espacio, especialmente en las regiones donde había poca estructuración previa, sea política o económica. Es el caso de las sierras cafetaleras, donde la CNC estaba casi ausente, mientras que el Inmecafé no había hecho labor de organización profunda.

Las ARIC permiten recuperar el descontento a la vez que propician la creación de interlocutores capaces de negociar con el aparato corporativista. Las pugnas internas de éste se reflejan en las organizaciones; cada ARIC intenta formar su propia clientela. En la región de Tlapacoyan es notable la competencia política entre dos de ellas para legitimar sus posiciones y sus pretensiones de canalizar los recursos tanto políticos (puestos de elección) como económicos (créditos, subsidios) otorgados por el centro. Esta "desviación", resultado de las tensiones nacionales y regionales en las instancias políticas dedicadas al campo, desemboca en la constitución de grupos regionales que pretenden representar "al sector social", se autodenominan "empresas sociales" y negocian a nombre del campesinado. Estos grupos se desarrollan desde entonces de acuerdo con el modelo de "neocorporativismo agrícola" mencionado por M. Fernández y A. Bartra (1991):

si el acceso a la tierra fue mediado por un cacicazgo agrarista, base del viejo corporativismo, el acceso a los espacios de gestión y a los recursos económicos está siendo mediado por un cacicazgo agrícola de cuello blanco, base del nuevo corporativismo tecnocrático (Bartra 1991:12).

Las cúpulas dirigentes adquieren cierto poder regional, sin que se desarrolle paralelamente un aparato organizativo democrático. De hecho

las ARIC oficialistas no propiciaron el surgimiento de una cultura política, entendida en su sentido amplio de participar en las decisiones importantes para el desarrollo local. Al agudizarse los problemas financieros de las organizaciones, las bases campesinas, que nunca participaron realmente en la gestión, quedan todavía más marginadas. Todo el esfuerzo se concentra en la búsqueda de soluciones técnico-económicas para que sobrevivan las organizaciones, que se vuelven así los monstruos de los cuales habla Bartra. El mismo autor pronostica lúcidamente: "Cuando la lucha de los campesinos por la apropiación del proceso productivo se transforma en expropiación de la organización por sus aparatos económicos, es inminente la quiebra y desmembramiento o la corporativización" (Bartra 1991: 14). De hecho fue uno de los riesgos que no supieron evitar las ARIC cafetaleras de la región de Tlapacoyan-Misantla.

De manera paradójica, aunque las ARIC-CNC llegaron muy temprano al campo de la organización de productores, sus estructuras eran ya, sin embargo, obsoletas. Muy temprano en la medida en que no asumieron (¿podían y lo querían?) su condición real. Se presentaron como "empresas sociales" cuando en realidad eran "asociaciones mixtas" entre pequeños campesinos y grandes productores. Este modelo de asociación, que ahora busca propiciar el Estado con base en un funcionamiento económico neoliberal desprovisto de obligaciones o papel políticos, era prematuro hace diez años. Entonces se trataba, en un primer momento, de "alianzas" contra un enemigo común, en este caso representado por el Inmecafé, y luego de representación y negociación "en nombre de" los campesinos frente al Estado. Las ARIC no podían escapar a este modelo que les permitió emerger y obtener legitimidad, y que ahora las condena: los cambios actuales tienden a marginar los sistemas corporativistas tradicionales, quitando así el apoyo político indispensable a la supervivencia de las organizaciones sociales oficialistas. Lo que permitió a éstas vivir artificialmente durante un tiempo, al final fue la causa de su pérdida.

En lo económico el modelo de las ARIC funcionó hasta que fue rebasado por las limitaciones impuestas por las pésimas condiciones del mercado internacional y el manejo corrupto y fraudulento de las organizaciones.

Hoy, el desfase entre las facetas políticas y económicas ha sido denunciado por una parte del aparato de Estado, que intenta desligar una de otra con un nuevo modelo, con nuevos actores⁶ exclusivamente económicos. Sin embargo, la disociación entre lo político y lo económico

⁶ Gordillo (1988) rechaza el término de "nuevos actores" y prefiere el de "actores reconstituidos", marcando así la continuidad y las relaciones entre los movimientos y organizaciones de los años ochenta y los actuales.

no se ha consumado. Si el discurso oficial propone referentes claros como base de discusión, la práctica obliga a ser más cautos. El juego de poderes dentro del aparato estatal, así como la reticencia de las organizaciones a perder lo que fundamentaba su presencia, provocan trabas administrativas, políticas y económicas que impiden la realización de las reformas más importantes, como se está viendo en estos momentos (1992) con la restructuración de las carteras vencidas.

De hecho, a principios de 1992 hay varios indicios de un cambio, si no es que de un retroceso, en la orientación francamente neoliberal de la política agropecuaria del gobierno desde 1988. Por un lado el Inmecafé, que todos consideraban moribundo, tiene un proceso discreto de "renacimiento", quizás pasajero, en tanto el Estado le confía un papel en la capacitación de los cafecultores para mejorar la producción (visita de Carlos Hank González a los cafecultores en Veracruz, enero de 1992). Por otro lado, tuvieron que revisarse las estrictas normas de pago de las deudas de los productores y las organizaciones cafetaleras al Banrural, cuando el presidente de la República anunció un conjunto de medidas de renegociación de las carteras vencidas (gira en Veracruz, 6 de enero de 1992). Por fin, las organizaciones, entre ellas las ARIC, que eran fuertemente criticadas por las instancias gubernamentales (SARH, Banrural), están de nuevo llamadas a desempeñar un papel de interlocutores de estas instancias, en ausencia de otras estructuras representativas de los productores. Se les exige, sin embargo, que modernicen sus aparatos productivos, comerciales y financieros para adecuarse a las condiciones del mercado y que acepten negociar en el marco de las nuevas políticas agrícolas y agrarias. Esto plantea un escenario en el cual son las mismas organizaciones las que promueven las transformaciones en el campo. Siguen con su papel de mediador entre los campesinos y las diversas tendencias del aparato del Estado, renovando alianzas pero aceptando las reglas impuestas. Una de ellas se refiere al trato a los campesinos incapaces de entrar en el molde de la modernidad. Si bien el Pronasol pretende resolver algunas de las urgencias actuales, no representa una "alternativa" de desarrollo a largo plazo para estos productores marginados por el "progreso"; las organizaciones, por su parte, ya no tienen la capacidad, ni política ni económica, de integrarlos en proyectos aceptables por los bancos e instancias de financiamiento.

El proyecto actual de modernización, a diferencia del de los años ochenta, sí se enfrenta directamente con las estructuras de poderes locales, muchas de ellas ligadas al control del sector social. Sin embargo, las propuestas sociales y económicas dejan de lado a una gran proporción del campesinado, que ya no cree en las organizaciones oficialistas, ni tiene posibilidad, en estos tiempos de crisis aguda (especialmente en el

sector cafetalero), de crear otras viables (con algunas excepciones como la CNOC). Los canales de comunicación y de negociación entre el campesinado pobre y el Estado, se cierran, a pesar de los programas y organismos, que no toman en cuenta la especificidad de los muy pequeños productores (minifundistas ejidales o no) ni tienen cohesión y consenso suficiente entre ellos para impulsar proyectos viables.

En el plano regional, la crisis del modelo organizativo y la desaparición de varias ARIC implica una recomposición de los grupos locales de poder, ya que los dirigentes buscan nuevas vías y alianzas para sobrevivir, ya sea como organización del sector social o volcándose hacia el sector privado. Los campesinos no participan realmente en estos procesos de reorganización, y asisten de lejos, sin voz propia, a la instalación paulatina de los nuevos mecanismos de negociación.

Recibido en febrero de 1992

Revisado en julio de 1992

Correspondencia: Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération (ORSTOM), 213, rue La Fayette 75480, Paris, Cedex 10; El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos; Camino al Ajusco 20, Col. Pedregal de Santa Teresa, 10740 México, D.F.

Bibliografía

- Bartra, Armando (1990), "Modernidad, miseria extrema y productores organizados", en *El Cotidiano*, núm. 36.
- _____ (1991), "Pros, contra y asegunes de la 'apropiación del proceso productivo'" (Notas sobre las organizaciones rurales de productores), en *Los nuevos sujetos del desarrollo rural, Cuadernos Desarrollo de Base*, núm. 2, México, ADN Editores.
- Bartra, Roger *et al.* (1985), *Caciquismo y poder político en el México rural*, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 7a. ed.
- Bernard, C. (1988), *Différenciation des systèmes de production à la périphérie du bassin caféier de Xalapa-Coatepec (Ver., Mexique)*, tesis, París, INAPG.
- Carton de Grammont, Hubert (1992), "El campo hacia el fin del milenio", en *Nexos*, núm. 169, enero de 1992, pp. 49-54.

- Celis, Fernando (1991), "UPVC: del cambio del terreno al fortalecimiento de una organización democrática", en *Cafetaleros, Cuadernos Desarrollo de Base*, núm. 3, México, ADN Editores.
- Flores Lua, Graciela et al. (1988), *Las voces del campo, movimiento campesino y política agraria 1976-1984*, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM/Siglo XXI Editores.
- García, Arturo (1991), "Proceso de construcción del movimiento campesino en México: la experiencia de la CNC", en *Cafetaleros, Cuadernos Desarrollo de Base*, núm. 3, México, ADN Editores.
- García, Emilio (1991), "Estrategia modernizante y perfil del movimiento campesino", en *Cuadernos Agrarios*, núm. 1, México, CRIM/UNAM.
- García S. y B. Sallée (1991), *La transformación y comercialización de café en la parte central de Veracruz: el papel de las organizaciones campesinas*, México, mimeo.
- Gordillo, G. (1988), "Para construir el leviatán rural", en J. Patterson Zepeda, *Las sociedades rurales hoy*, Michoacán, El Colegio de Michoacán/Conacyt.
- Hernández, Luis (1991), "Nadando con tiburones: la experiencia de la CNOC", en *Cuadernos Agrarios*, núm. 1, México, CRIM/UNAM.
- Hoffmann, O., C. Blanc-Pamard y J.P. Rossignol (1987), *Paisaje y sociedad en un ejido veracruzano (Xico). Prácticas campesinas y dinámica cafetalera*, México, INIREB/ORSTOM.
- Inmecafé (1991), *Avances en el programa de desincorporación de la planta agroindustrial del Inmecafé*, Unidad de desincorporación, México, resumen ejecutivo.
- Knochenhauer, Guillermo (1990), *Organizaciones campesinas. Hablan diez dirigentes*, México, IEPES/El Día en libros, *La Jornada*, México, octubre de 1991.
- Marchai, Jean-Ives y Rafael Palma G. (1985), *Análisis gráfico de un espacio regional: Veracruz*, Xalapa, Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos.
- Moguel, Julio (1991), "El Programa Nacional de Solidaridad ¿para quién?", en *Los nuevos sujetos del desarrollo rural. Cuadernos Desarrollo de Base*, núm. 2, México, ADN Editores.
- Olvera, Alberto J. (1991), "Las luchas de los cafeticultores veracruzanos: la experiencia de la Unión de Productores de Café de Veracruz", en *Cafetaleros, Cuadernos Desarrollo de Base*, núm. 3, México, ADN Editores.
- Paré, Luisa (1991), "¿Adelgazamiento del Inmecafé o de los pequeños productores de café?", en *Cafetaleros, Cuadernos Desarrollo de Base*, núm. 3, México, ADN Editores.
- , J. C. Hernández y C. Casas (1991), *El campo veracruzano y la modernización*, Taller de Análisis de Coyuntura de Veracruz (Tcover), Xalapa, Veracruz.
- Pasquis, R. y B. Sallée (1991), *La gestion individuelle au service de l'innovation technique dans un bassin caféier du Mexique*, mimeo.
- Pepin-Lehalleur, M. (1990), *Introduction aux pratiques du crédit institutionnel au Mexique à l'heure actuelle*, ponencia presentada en la mesa redonda

“Le crédit rural en Mesoamérique. Formes de financement du XVIIe au XXe siècle”.

Pérez Arce, Francisco (1991), “‘Café, política y mercado’ en los nuevos sujetos del desarrollo rural”, *Cuadernos Desarrollo de Base*, núm. 2, México, ADN Editores.

Rubio, Blanca (1991), “Política agropecuaria y movimiento campesino: dos opciones ante la crisis”, en *Cuadernos Agrarios*, núm. 1, México, CRIM/UNAM.

Sallée, B. y S. García (1991), *Profesionalizarse o desaparecer: las alternativas de las organizaciones cafetaleras*, Xalapa, multicopiado.

SIV, Servicios Informativos de Veracruz, Xalapa, Centro de Estudios Agrarios (*Diario de Xalapa, Crónica, Gráfico*).

Zepeda Patterson, J. (ed.) (1988), *Las sociedades rurales hoy*, Michoacán, El Colegio de Michoacán/Conacyt.

Anexo 1

LOS BENEFICIOS DEL INMECAFÉ EN TRANSFERENCIA (JUNIO DE 1991)

Veracruz:

- *Región de Misantla*: *La Garza-Yecuatla; *San Antonio-Misantla; *Juchique-Juchique; *Cuauhtémoc-Tenochtitlan; *Vicente Guerrero-Misantla; *Atzintla-Tlapacoyan, *Coyutla-Coyutla, *Tepeican.
- *Región de Xalapa*: **Puerto Rico (con beneficio seco, pendiente); **Miguel Palacios (con beneficio seco).
- *Región de Huatusco*: *Cruxtitla (con beneficio seco, pendiente); *Fortuna; *Gordejuela.
- *Región de Córdoba*: *Barranca San Miguel; *Paraíso; *Reforma; *Chicomapa; *S.J. Tenejapa; *El Águila.
- ** *Orizaba* (con beneficio seco).
- ** *Acazacatlan*.

Totales

Veracruz: 21 beneficios húmedos + 4 beneficios secos.
 Puebla: 9 beneficios húmedos
 Guerrero: 3 beneficios húmedos + 1 beneficio seco
 Chiapas: 2 beneficios secos
 Oaxaca: 2 beneficios secos
 Nayarit: 2 beneficios húmedos
 Hidalgo: 1 beneficio seco
 San Luis Potosí: 1 beneficio húmedo

Total: 36 beneficios húmedos + 10 beneficios secos

Nota: a menos que se señale lo contrario, se trata de beneficios húmedos.

* En arrendamiento a organizaciones del sector social.

** En desmantelamiento.

Fuente: Inmecafé.

Anexo 2

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA CUANTITATIVA DE LA TRANSFERENCIA¹

1. *Capacidad instalada* de las instalaciones del Inmecafé, en febrero de 1991 (por temporada de cosecha, contando 105 días ocupados):

En instalaciones arrendadas	970 515 qq
En contratos de maquila participativa	393 750 qq
En instalaciones por desmantelar	1 041 075 qq
En beneficios pendientes	97 650 qq
<i>Total</i>	2 508 240 qq

o sea 1 897 720 sacos de 60 kg, que representan 41% de la producción nacional estimada en 1990-1991 (4 579 000 sacos).

2. *Población involucrada*

Es interesante notar que el Inmecafé siempre habla en términos de grupos beneficiarios, pero en ningún momento ofrece cifras de individuos. La transferencia, en febrero de 1991, involucraba a 453 organizaciones de productores, entre figuras formales y funcionales:

- 60% de SSS (Sociedades de Solidaridad Social),
- 12% de UEPC (Unidades Económicas de Producción y Comercialización),
- 16% entre sectores de producción, sociedades de producción Rural y Ejidos,
- 12% entre otros 15 tipos de agrupación (uniones, ARIC, Comités, etcétera).

Sin embargo, en su informe de agosto de 1991, el director general de Inmecafé menciona un programa "en el sentido en que aquellos productores que estén involucrados en la transferencia de los beneficios del Inmecafé, cubran sus adeudos a través de la venta de su café. Dicho programa abarca un universo de 60 000 productores y está calendarizado para el ciclo 1991-1992."

Estos 60 000 productores representan el 44% de los cafecultores minifundistas, y el 30% del total de los cafecultores, de acuerdo a los datos entregados por el mismo Instituto, a nivel nacional ("Último censo cafetalero", Dirección de Investigación y Fomento a la Cafecultura, 1991):

<i>Tamaño del predio (ha)</i>	<i>Productores</i>	<i>Hectáreas</i>
Hasta 2	138 192	203 544
De 2 a 5	35 941	157 967
De 5 a 10	11 791	90 724
Más de 10	3 998	108 108
<i>Total</i>	193 922	560 343

¹ Fuente: *Informe Inmecafé* 1991.

Anexo 3

¿SON LOS BENEFICIOS HÚMEDOS UN RECURSO ESTRATÉGICO?

Es bastante difícil evaluar la capacidad agroindustrial instalada ya que los censos del Inmecafé son poco fiables y los beneficios privados muy numerosos. Se trata aquí de una mera estimación.

En la región de Misantla (definida al principio) se encuentran seis beneficios en transferencia con una capacidad total de 2 336 qq diarios, o sea 245 280 qq por cosecha (105 días ocupados):

Atzinta, 830 qq; San Antonio, 580 qq; La Garza, 210 qq; Vicente Guerrero, 140 qq; Juchique, 496 qq; Cuauhtémoc, 80 qq.

Beneficios privados en el municipio de Juchique: 27*

Beneficios privados en los demás municipios: 21 (por encuestas)

ARIC Plan de Arroyo: 180 qq, 18 900 qq por cosecha.

En general, los beneficios más chicos tienen capacidad de 60 qq, por lo que el mínimo de capacidad regional privada sería de $48 \times 60 = 2\,880$ qq diarios, o sea 302 400 qq por cosecha más los 18 900 qq (Plan de Arroyo), más los 245 280 qq (beneficios en transferencia), un total (en transferencia más privados) de más de 560 000 qq como estricto mínimo, ya que muchos de los beneficios privados tienen en realidad capacidad superior de 120 qq en general, y que no se tomaron en cuenta algunos beneficios por falta de información.

La producción regional se estima en 13.2 qq/ha, o sea cerca de 400 000 qq por cosecha (alrededor de 32 000 ha). En 1991-1992, dos años después de las heladas en la región, son aún frecuentes los rendimientos inferiores a 10 qq/ha, por lo que la producción regional efectiva ha de ser todavía menor que la cifra mencionada. La capacidad agroindustrial es en todo caso suficiente para transformar toda la producción, aun si la capacidad real de trabajo es en general muy inferior a la instalada.

* Censo de 1982; véase Marchal y Palma, 1985.

Nota: no se consideran los beneficios de la ARIC Misantla, hoy parados y en vía de desmantelamiento, y se desconoce la capacidad de los beneficios de la ARIC Tlapacoyan.

La "ARIC Misantla está siendo desmantelada por un rico cafeticultor de Córdoba, quien se llevó para la ciudad de México un tostador y acaba de vender un trailer en más de 60 millones de pesos", declaró el gerente regional del Banrural del Golfo (*Diario de Xalapa*, 14-IV-1991).